

Ómicron se extiende por Europa y amenaza la recuperación económica

AMENAZA/ La nueva cepa del Covid dispara las alarmas en el Viejo Continente, donde ya se han detectado contagios en al menos siete países. “Estamos en una carrera contrarreloj”, advirtió ayer Von der Leyen.

J. Díaz. Madrid

A pesar de la decisión de la UE y otros países de suspender vuelos con el sur de África, criticada por la OMS, que pide que las fronteras sigan abiertas, la variante Ómicron se encuentra ya en Europa y se extiende como un reguero de pólvora, amenazando la recuperación económica. En apenas dos días se han detectado casos en Bélgica, Reino Unido, Alemania, República Checa, Italia, Dinamarca y Países Bajos, donde al cierre de esta edición ya se habían confirmado más de una docena de contagios con la nueva cepa, que la OMS ha calificado de “variante de riesgo” por su mayor capacidad de transmisión y de reinfección y ante el temor a que sea resistente a las vacunas.

La irrupción de la nueva y amenazadora mutación, que el viernes pasado provocó una jornada negra en los mercados, con desplomes generalizados (el Ibex cayó un 5% y el precio del crudo se hundió un 11,5%) y que hoy volverá a ponerlos a prueba, ha coincidido con un repunte generalizado de los contagios en Europa. Esto ha provocado el retorno a las restricciones, e incluso a los confinamientos, en una lista creciente de países. Un paso

Bruselas pide ganar tiempo agilizando las vacunas y reduciendo los contactos

atrás en la lucha contra la pandemia que puede contraer la demanda, lastrando la actividad económica y frenar la recuperación global.

Ómicron ha disparado ya las alarmas en Europa. “Nos tomamos esta Ómicron muy en serio. Estamos ahora en una carrera contrarreloj, porque no lo sabemos todo acerca de esta variante, pero es una variante de preocupación”, admitió ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien subrayó la necesidad de “ganar tiempo” agilizando la vacunación y reduciendo los contactos. Por su parte, Reino Unido anunció la convocatoria urgente hoy lunes de una reunión de los ministros de Salud del G7 para evaluar la amenaza de la nueva cepa.

Este miedo generalizado se ha traducido en el retorno a unas medidas restrictivas que ya están adoptando cada vez más países. Así, Países Bajos entró ayer en un “confinamiento nocturno” por el que



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ayer.

se impone el cierre de toda la actividad no esencial a partir de las 17.00 hora local; Inglaterra reintroducirá el martes el uso obligatorio de mascarilla en el comercio y el transporte público y exigirá un test PCR a todos los viajeros a su regreso del extranjero; Portugal volverá el miércoles al estado de calma, y países como Austria y Eslovaquia han decretado el confinamiento de la población.

Son malas noticias para el proceso de reactivación de la economía, cuyo ritmo de crecimiento ya se había ralentizado por la escalada de los precios energéticos, el encarecimiento y escasez de la materias primas y las interrupciones en las cadenas globales de producción y suministro. Ahora, el temor a Ómicron puede ralentizar aún más ese proceso por las nuevas trabas a la actividad económica para

contener el avance del virus.

Pese a la alarma en Europa, en España aún no se habla de medidas para afrontar la nueva cepa, algo que este fin de semana censuró la oposición. El presidente del PP, Pablo Casado, criticó la “falta de respuesta” del Gobierno de Pedro Sánchez de la nueva variante del Covid y le reclamó una ley de pandemias para unificar las actuaciones en la lucha contra el virus.

Solo una de cada cuatro empresas tiene plan de pensiones

Expansión. Madrid

En pleno debate sobre la reforma de las pensiones y con el Gobierno ultimando fondos de pensiones de promoción pública para impulsar la creación de este tipo de planes en las empresas, los datos muestran que solo un 26,8% de las compañías españolas cuenta con planes de previsión social para sus empleados, aunque más de la mitad, un 55%, “tiene en su agenda la toma de medidas para planificar la jubilación de sus empleados a medio plazo”. Así lo refleja el *V Informe Situación de las Pensiones en España* publicado ayer por KPMG, en el que han participado 439 empresas, aunque con “poca representación de las pymes en la muestra”. De incluirse estas últimas, el porcentaje de empresas con planes de previsión social sería “significativamente menor”, afirma KPMG. Por sectores, el más activo es el financiero, ya que un 61,8% de las empresas cuenta con estos planes, seguido del energético (48%), el químico y farmacéutico (40,5%), la tecnología (27,3%), y los servicios (24,2%). Por contra, los sectores en los que menos empresas hay con al menos un plan de previsión son la industria (15,7%), la construcción (14,3%) y el transporte y la logística (5,3%).

Escrivá aprieta a las gestoras de pensiones



LA ESQUINA

Miguel Valverde
mvalverde@expansion.com
@MiguelValverde4

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está decidido a rebajar las comisiones que el sector financiero cobra a los particulares por gestionar los planes de pensiones. Escrivá considera que la retribución que se llevan las gestoras por su cometido es una de las razones de que, al final, no le rinda cuenta al trabajador ahorrar para complementar la pensión de la Seguridad Social.

La verdad es que Escrivá no es el único responsable de la Seguridad Social que ha reprochado al sector privado las comisiones que cobra por los planes de pensiones. Recuerdo perfectamente que ya Tomás Burgos, secretario de Estado con Fátima Báñez, ministra de Trabajo y Seguridad Social con Rajoy, le dijo varias veces a los empresarios que debían abaratar el producto, en lugar de regalar al ahorrador sar-

tenes, ollas y televisores, entre otros muchos productos del hogar que nada tienen que ver con la pensión del futuro.

En este contexto, Escrivá quiere limitar los costes de gestión de los planes de empleo colectivos a un nivel inferior por debajo del 0,30% del valor de los activos gestionados, con una licitación abierta a la competencia. Así se recoge en la memoria del anteproyecto de ley de los fondos de pensiones de promoción pública. En los primeros borradores, Escrivá situó la comisión entre el 0,5 y el 0,4%.

El Ministerio llega a esta conclusión porque ha observado que los fondos de pensiones de empleo de más de 100 millones de euros sometidos a licitación, como los de los empleados públicos, tienen niveles base de costes de gestión inferiores al 0,30%. Hay que tener en cuenta que la Seguridad Social espera que los

El Gobierno cree que las gestoras de los planes de empleo de promoción pública pueden bajar comisiones hasta el 0,15%

fondos de promoción pública lleguen a tener cifras muy superiores a los 100 millones. Según la memoria, hasta como mínimo de 250 millones de euros.

Por otra parte, el Ministerio que dirige Escrivá ha hecho un estudio basado en las cuentas de resultados de las entidades gestoras de fondos de pensiones más significativas y concluye que “sus costes, incluyendo el coste imputado del capital regulatorio, son muy inferiores al 0,30% de sus activos bajo gestión”. Por lo tanto, las gestoras “podrían operar a largo plazo sin pérdidas en el entorno del 0,15%, por lo cual es esperable que las entidades gestoras adjudicatarias trabajen por debajo de ese límite, aunque en el proceso de lanzamiento sus costes sean más elevados”, dice la memoria del anteproyecto de ley.

Para impulsar también los planes de empleo, el Gobierno ha aumentado las deducciones del ahorro en los planes de empleo para empresas y trabajadores. Hasta 8.500 euros al año. E, incluso, según el ministro, la deducción podría llegar a 10.000 euros de ahorro si alguna persona puede tener el plan de la empresa y uno par-

ticular. Es evidente que Escrivá quiere lanzar este plan, con costes de gestión más bajos y con la tutela del Estado, como un instrumento más del sistema público de pensiones frente a la próxima jubilación de las cohortes de trabajadores más numerosas de la historia de la Seguridad Social. El objetivo es que los fondos de promoción pública alcancen la cobertura del 50% de la población activa ocupada en una década, para situarse en el entorno de naciones europeas. Es decir, unos 10 millones de trabajadores. Sobre todo entre las pequeñas empresas, los trabajadores de medios y bajos salarios, los autónomos y los funcionarios. En ese plazo, el ministro espera aumentar la tasa de ahorro para la jubilación en un 2,5% del PIB anual a final de la década. De forma que al final de la década, en un escenario favorable para el ahorro, las aportaciones de los trabajadores podrían elevar el patrimonio actual de los planes de empleo desde el actual 3% del PIB, que son unos 35.000 millones de euros, al 16%. Es decir, unos 200.000 millones con un producto de 1,3 billones de euros, que es el que figura en los Presupuestos del próximo año.